

Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.-

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece Freddy González Galleguillos, quien patrocinado por abogado deduce recurso de reclamación de ilegalidad en contra del Ministerio Público, por denegación parcial de acceso a la información pública, en virtud de la Ley N° 20.285.

Refiere, que con fecha 15 de mayo de 2024, a través de la solicitud de Folio SIAU N° 21767, solicitó al recurrido acceso la siguiente información *“1.-Todos los oficios o documentos recibidos por la Fiscalía Nacional ya sea que fueron enviados al Fiscal Nacional o a la Directora Ejecutiva Nacional o a la Gerencia de RR.HH o a la unidad de Asesoría Jurídica, que contengan las solicitudes de candidatos 81-k, Candidatos finales 81-k, rechazo de 81-k y todo lo que tenga que ver con este articulado 81-k que fueron solicitados para ser ejecutados este 2024, incluyendo los listados de los funcionarios TODOS los fueron propuestos para esta medida de todas las Fiscalía Regionales del país incluyendo las fiscalías regionales Metropolitanas; 2.-Copia de la tabla del consejo general de fiscales con indicación de hora de discusión de cada tema(consejo realizado en Aysén en el mes de marzo); 3.- Copia del informe del consejo general de fiscales aludido en el art.81-k; 4.-En caso que el pronunciamiento o discusión haya sido verbal, copia de los audios respectivos de la discusión de dicho artículo y aprobación con indicación de hora y termino del debate del mismo; 5.- Explicación de que filtros se ocuparon en asesoría jurídica y de RR.HH para descartar candidatos propuestos; 6.- Explicación del porque fueron rechazados de la aplicación del 81k, por cada uno de los funcionarios que fueron propuestos y no aplicados; 7.- Presupuesto ocupado por región para pago de indemnizaciones de lo 81k aplicados.*

En cuanto a dicha solicitud, refiere que por medio de la carta DEN/LT N°379-2024, de 7 de junio de 2024 se le comunicó que el plazo legal de 20 días hábiles para responder sería prorrogado durante 10 días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 20.285.

Indica que posteriormente, esto es el 4 de julio de 2024, se le notificó por correo electrónico la carta DEN/LT N°430-2024, que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GSXCXTEZGMC

dispuso que la información relativa a la nómina de los funcionarios a la que se alude en el requerimiento corresponde a información de carácter secreto o reservada, conforme a lo que estipula el artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, añadiendo que las Actas del Consejo General de Fiscales, en cuanto corresponden a documentación interna que dan cuenta de antecedentes, análisis, discusiones o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas, en el seno del órgano consultivo superior del Ministerio Público, por lo que se encuentran protegidas por la causal de secreto o reserva que establece el artículo 8 inciso 4° de la Ley N° 19.640, en relación con su artículo 1° y lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política de la República.

Agrega que no obstante lo anterior, se ordena remitir, en razón del principio de divisibilidad, la tabla del Consejo General de Fiscales realizado en la ciudad de Coyhaique los días 25 y 26 de marzo del año 2024, donde aparecen los temas que fueron abordados en la instancia.

Respecto de los filtros ocupados por la Unidad de Asesoría Jurídica y por la División de Personas de la Fiscalía Nacional para descartar a los candidatos propuestos y su explicación del por qué fueron rechazados, la misiva le comunicó que la evaluación de las solicitudes se realiza en virtud del cumplimiento de los requisitos previsto en el citado artículo 81 letra k) de la Ley N°19.640, a saber, por necesidades de la Fiscalía Nacional o Regional, en su caso, tales como las derivadas de la dotación anual que se fije para el personal, de la racionalización o modernización y del cambio de la naturaleza de las funciones que haga necesaria la separación de uno o más funcionarios, por lo que la revisión se centra en la coherencia de la necesidad propuesta, su argumentación de cumplimiento y el destino del cargo, siendo el rechazo de las propuestas por la inconsistencia entre la necesidad descrita, su argumentación de cumplimiento o el destino del cargo. Hace presente además que se toma en cuenta para su exclusión, la situación de salud grave personal o de un familiar.

Finalmente, la comunicación singularizada proporciona en respuesta a su petición el presupuesto de indemnizaciones por aplicación de la causal de desvinculación contemplada en el artículo 81 letra k) de la Ley N° 19.640, desagregada por Fiscalía Regional y Nacional.



Argumenta el recurrente, en cuanto a la naturaleza de la información que se califica de reservada que esta corresponde a antecedentes referidos a la terminación de contratos de trabajo de funcionarios que trabajaron para el Ministerio Público por aplicación de necesidades de la Institución, argumentando al efecto que se trata de un órgano creado para el cumplimiento de una función pública, sujeto al principio de publicidad establecido en el artículo 8 inciso 2º de la Constitución Política de la República, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, por lo que dicha información es de carácter pública, obra en poder de la Institución, financiada con fondos públicos, y no se encuentra resguardada por la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285.

En relación con el documento singularizado bajo los numerales 3º y 4º del requerimiento, esto es la copia del Informe del Consejo General de Fiscales aludido en el artículo 81-k y la copia del audio respectivo en caso de que la discusión haya sido verbal, controvierte la argumentación del Ministerio Público, señalando que dichos antecedentes nada tienen que ver con prevención, investigación y persecución criminal, ni tampoco están asociados a documentos asociados a defensas jurídicas, por lo que la alegación de la recurrida respecto a la causal de reserva ha sido general, constituyendo menciones hipotéticas y meras apreciaciones subjetivas, las que a su juicio, impiden configurar la causal de reserva aludida.

Por todo lo expuesto, solicita acoger la reclamación interpuesta, ordenando al Ministerio Público entregar:

1) Todos los oficios o documentos recibidos por la Fiscalía Nacional ya sea que fueron enviados al Fiscal Nacional o a la Directora Ejecutiva Nacional o a la Gerencia de RR.HH o a la Unidad de Asesoría Jurídica, que contengan las solicitudes de candidatos 81-k, Candidatos finales 81-k, rechazo de 81-k para ser ejecutados este 2024, incluyendo los listados de todos los funcionarios que fueron propuestos para esta medida en la totalidad de las Fiscalías Regionales del país incluyendo las Fiscalías Regionales Metropolitanas, y;

2) Copia del informe del Consejo General de Fiscales aludido en el Art.81-k y si el pronunciamiento o discusión haya sido verbal, copia



de los audios respectivos de la discusión de dicho artículo y aprobación con indicación de hora y termino del debate de este; con costas.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece Antonio Marangunic Hinojosa, Director Ejecutivo Nacional (s) del Ministerio Público, quien solicita el rechazo de la acción deducida, con expresa condena en costas.

Previa referencia al requerimiento y el correspondiente pronunciamiento de su parte, precisa que este entregó la información correspondiente a los numerales 2, 5, 6 y 7 de la solicitud, rechazando lo pedido en los numerales 1, 3 y 4.

En cuanto al primer punto rechazado argumenta que su contenido dice relación con una materia que se encuentra afecta a la causal de secreto o reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, sobre el Acceso a la Información Pública, que permite al órgano requerido denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada. En este sentido, estiman que develar los nombres de los funcionarios que fueron desvinculados, así como también de aquellos que potencialmente podrían haberlo sido, sin el debido contexto o justificación, podría repercutir negativamente en el honor y reputación de estas personas.

Al respecto enfatiza en que la exposición pública de un despido o potencial desvinculación puede ser interpretada de múltiples formas por la ciudadanía, pudiendo ser indicador de falta de capacidad, competencia o integridad, sin considerar necesariamente las circunstancias particulares o el contexto al que llevaron a esa decisión, percepción que puede ir en desmedro de la imagen de la persona y ser eventualmente perjudicial para oportunidades laborales futuras. Asimismo, manifiestan que dicha exposición podría ser un elemento de generación de conflictos internos entre la persona afectada y su jefatura, tensionando el ambiente laboral, por lo que, a mayor abundamiento, afirma que todos los antecedentes referidos a los funcionarios que, en definitiva, no fueron desvinculados en virtud del proceso establecido en el artículo 81 k) de la Ley N°19.640, es destruida.



Manifiesta el recurrido, en cuanto al requerimiento del Informe del Consejo General de Fiscales del Ministerio Público y de la copia de los audios respecto a la discusión que se llevó a cabo, que estas se encuentran protegidas por la causal de secreto o reserva que establece el artículo 8° inciso cuarto de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que señala que se podrá denegar la información “cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo”, lo que, en el caso de autos, son las funciones de investigación, persecución penal y protección a víctimas y testigos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta Fundamental y el artículo 1° de la Ley N° 19.640, encontrando su correlato en la causal de reserva legal establecida en similares términos en la Ley N° 20.285, enfatizando en que de ser conocido su contenido por terceros ajenos al Consejo General, se podría impedir u obstaculizar gravemente el ejercicio de la acción del Ministerio Público, comprometiendo fuertemente el resultado de las investigaciones y los deberes constitucionales que está obligado a resguardar.

Añade al respecto que el rechazo de la entrega de las actas no solo dice relación con que estas se asocian con la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, sino que porque se tratan de antecedentes necesarios para configurar defensas jurídicas y judiciales, señalando que es de conocimiento público que en las desvinculaciones de los funcionarios del Ministerio Público, en su mayoría son judicializadas ante los juzgados laborales.

Señala adicionalmente que no existen grabaciones de audios de las sesiones del Consejo General de Fiscales del Ministerio Público, por lo que no hay nada que entregar asociado a dicho punto.

Previa referencia a la información entregada respecto de los otros numerales pedidos, enfatiza en que su parte no incurrió en ilegalidad alguna al otorgar la respuesta al requerimiento formulado por el recurrente, dándose estricto cumplimiento a las obligaciones que se encuentran establecidas en la Ley N° 20.285, sobre el Acceso a la Información Pública.

TERCERO: Que resulta conveniente recordar que el presente arbitrio *-reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a la*



información pública-, respecto del Ministerio Público, se encuentra contemplado en el artículo noveno transitorio de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, el que prevé que vencido el plazo para entregar la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley, el solicitante podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 29 y 30 del referido cuerpo normativo.

CUARTO: Que, es preciso referir que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política, incorporado por la Ley N° 20.050, establece que: “*Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.*”.

En este entendido, la Constitución asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información (artículo 19 N° 12), el que se encuentra reconocido en la Carta Fundamental –*aunque no en forma explícita*– como un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio de que representa además un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. De esta manera, la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

QUINTO: Que, por su parte, el inciso cuarto del artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público N°19.640, ya establecía que “*Son públicos los actos administrativos del Ministerio Público y los documentos que les sirvan de sustento o*



complemento directo y esencial”, consagrando luego un conjunto de hipótesis que permiten denegar el acceso a la información, al señalar en lo atinente “Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo.”.

Dicha norma, en consecuencia cumple con la exigencia del artículo 8 de la Constitución precedentemente transcrito, toda vez que, de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio de la Carta Fundamental debe entenderse *“que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales”.*

SEXTO: Que, el mismo sentido, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, establece en su numeral 1, letra b) que *“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:*

1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.”.

Luego, el antes citado precepto, en su numeral 2, establece como causal de reserva para la entrega de información, los casos en que los que la publicidad, comunicación o conocimiento de tales antecedentes, afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económica.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, debe considerarse que conforme preceptúa el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales, son datos personales, aquellos *“relativos a cualquier*



información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.”.

Tales datos, se encuentran expresamente amparados por el cuerpo normativo precitado, a fin de evitar que éstos sean entregados a terceros sin causa legal que lo justifique.

OCTAVO: Que, una vez determinado el marco normativo, es menester precisar que, en síntesis, lo pretendido por el reclamante mediante el ejercicio de la presente acción consiste en obtener de parte del Ministerio Público, todos los oficios o documentos recibidos por la Fiscalía Nacional *-remitidos por la totalidad de las fiscalía regionales del territorio nacional-* que contengan las solicitudes de candidatos a ser desvinculados del servicio, conforme al procedimiento reglado en el artículo 81-k de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público; de los antecedentes relativos a los “*Candidatos finales 81-k*” (Sic); del “rechazo de 81-k para ser ejecutados este 2024, incluyendo los listados de todos los funcionarios que fueron propuestos para esta medida en la totalidad de las Fiscalía Regionales del país incluyendo las Fiscalías Regionales Metropolitanas” (Sic).

Asimismo, requirió “*copia del informe del Consejo General de Fiscales aludido en el Art.81-k y si el pronunciamiento o discusión haya sido verbal, copia de los audios respectivos de la discusión de dicho artículo y aprobación con indicación de hora y termino del debate de este*” (Sic).

NOVENO: Que la información cuya entrega se requiere al ente persecutor *-en el primero de los acápite del reclamo, esto es, aquella relativa a la individualización de los funcionarios que fueron propuestos para ser desvinculados-*, en cuanto dice relación con antecedentes relativos a la individualización de los funcionarios de dicha institución que fueron desvinculados, así como también de aquellos que potencialmente podrían haberlo sido, sin el debido contexto o justificación, por cierto que tiene la aptitud de afectar los derechos de quienes se encontraban en las nóminas de rigor, en particular la esfera de su vida privada, toda vez que liberar tales datos *-que por lo demás, tienen el carácter de sensibles-* podría repercutir negativamente en su honor y reputación.



En ese entendido, configurándose en la especie la causal de causal de secreto o reserva prevista en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285, solo cabe concluir que el proceder del Ministerio Público, en orden a denegar la entrega de los antecedentes que la han sido requeridos, se encuentra ajustado a derecho.

DÉCIMO: Que, por otra parte, y respecto del requerimiento de entrega de la copia del informe del Consejo General de Fiscales aludido en el Artículo 81-k de Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y *-si el pronunciamiento o discusión haya sido verbal-* de la copia de los audios respectivos de la discusión de dicho artículo y aprobación con indicación de hora y termino del debate, no solo se configura el motivo de causal de secreto o reserva prevista en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley N° 20.285 *-por la razones esbozadas en el considerando que antecede-*, sino que también aquel previsto en el artículo 8° inciso cuarto de la Ley N° 19.640, precepto que señala que la Fiscalía podrá denegar la información “*cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo*”.

Lo anterior, toda vez que resulta evidente que de liberarse tales antecedentes se generarían dificultades interpersonales al interior de la institución, las que generarían una grave afectación en el ejercicio de las funciones que le son propias, en particular en el resultado de las investigaciones y en el cumplimiento de los deberes que constitucionalmente le han sido asignados.

UNDÉCIMO: Que, conforme lo antes expuesto y razonado, la decisión del órgano reclamado de declinar el acceso a los datos solicitados por el reclamante satisface las exigencias propias del control de racionalidad a que debe someterse la decisión denegatoria de acceso a la información pública.

En consecuencia, tal determinación se ha fundado en una causal legal y su correspondencia con los motivos o criterios que el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, tolera para la reserva o secreto y que se corresponde, en lo fundamental, al cumplimiento de las funciones del órgano requerido.



Ergo, la decisión del ente persecutor aparece legal, fundada y expedida en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, motivos que conducen necesariamente al rechazo del reclamo materia de autos.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA**, sin costas, el reclamo deducido por don Freddy González Galleguillos, en contra del Ministerio Público.

Redacción del Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Contencioso Administrativo N° 477-2024.

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por el ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez y la abogada integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GSXCXTEZGMC

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogada Integrante Maria Fernanda Vasquez P. Santiago, cuatro de marzo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a cuatro de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GSXCXTEZGMC